



RAMA JUDICIAL  
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE	GLORIA INÉS RESTREPO
DEMANDADO	PENSIONES DE ANTIOQUIA
RADICADO	05001-31-05-015-2022-00071-02
ORIGEN	JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	EXCEPCIÓN DE PAGO
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No.073

Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2021)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°003 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte **DEMANDANTE**, contra la decisión de excepciones del 2 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral a continuación de ordinario promovido por la señora **GLORIA INÉS RESTREPO RESTREPO** contra **PENSIONES DE ANTIOQUIA**.

ANTECEDENTES

La señora **GLORIA INÉS RESTREPO** adelantó demanda ejecutiva laboral a continuación de ordinario en contra de **PENSIONES DE ANTIOQUIA**, pretendiendo que se libre mandamiento de pago por las obligaciones contenidas en la Sentencia SL916-2021 a través de la cual la Sala de Casación Laboral de la CSJ **CASÓ** la Sentencia del 25 de abril de 2014 proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, revocando a su vez la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2011 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, (Archivo 02 ED), a saber:

1. Por la suma de \$74.136.002 por concepto de diferencias en el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 31 de agosto de 2009 hasta el 28 de febrero de 2021.
2. Por la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de la pensión de vejez, desde el 1 de marzo de 2021 hasta la fecha de cancelación efectiva.
3. Por la suma de \$7.413.600, correspondientes a las costas del proceso ordinario.
4. Por la indexación de las anteriores sumas.

## ACTUACIÓN PROCESAL

En razón a lo anterior, el Juzgado en comento profirió el Auto No. 129 del 17 de febrero de 2022, en el que libró mandamiento de pago en contra de la entidad demandada en los siguientes términos: “(...) - *Por la suma de \$74.136.002 por concepto de diferencias en el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 31 de agosto de 2009 hasta el 28 de febrero de 2021. //* - *Por la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de la pensión de vejez, desde el 1 de marzo de 2021 hasta la fecha de cancelación efectiva. (...)*”. Se abstuvo de proceder con el cobro forzado de las costas procesales reclamadas (Archivo 04 ED).

Notificada en debida forma la accionada, a través de escrito radicado el 29 de marzo de 2022, formuló la excepción de pago, la cual sustentó en el hecho de haber dispuesto el cumplimiento de la sentencia a través de la Resolución No. 2022030163 del 25 de febrero de 2022, efectuando el pago de lo adeudado a la actora el 28 de febrero de 2022 (f. 2 a 4 Archivo 11 ED).

Por Auto No. 545 del 22 de marzo de 2022, el Juzgado de conocimiento corrió traslado a la parte demandante de la excepción propuesta por la pasiva (Archivo 12 ED). En ese sentido, la ejecutante se pronunció al respecto, manifestando que lo cancelado por la entidad no permite concluir el cumplimiento integral de la sentencia, como quiera que, dentro de los cálculos efectuados, la ejecutada no indexó debidamente las diferencias correspondientes al periodo que va del 31 de agosto de 2009 y el 28 de febrero de 2021, esto era, actualizando las diferencias mes a mes, tal como quedó precisado en la sentencia mencionada.

Además, expuso que los descuentos en salud fueron efectuados, incluso, teniendo en cuenta las mesadas adicionales, sobre la cual no procedía efectuar tal deducción. En consecuencia, expuso la existencia de un pago parcial.

## DE LA PROVIDENCIA APELADA

En providencia del 2 de agosto de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito declaró probada parcialmente la excepción de pago formulada por la parte ejecutada, disponiendo continuar con la ejecución “(...) *por el capital insoluto correspondiente a la indexación mes a mes, de la diferencia de cada mesada pensional correspondiente entre 31 de agosto de 2009 y hasta el 28 de febrero de 2021, valor respecto del cual, igualmente, se podrá descontar el 12% correspondiente a los aportes en salud. (...)*”. Le impuso el pago de costas a la entidad demandada.

Para arribar a esta decisión la Juzgadora expuso que, teniendo en cuenta la documental aportada por la pasiva que da cuenta del pago de la suma de \$70.083.119, previo descuento de los aportes en salud (\$10.289.769), del cuadro liquidatorio arrojado por la pasiva, reparó frente a la forma en que la accionada realizó la indexación del retroactivo ordenado, en tanto no actualizó mes a mes las diferencia adeudadas desde el 31 de agosto de 2009 hasta el 28 de febrero de 2021, como se ordenó en el proceso ordinario, sino que, actualizó la suma de \$74.136.002 como único valor.

En cuanto a los descuentos en salud, expuso, fundamentada en el inciso 2° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que, al ser la mesada de la demandante superior al salario mínimo, no aplican los porcentajes de disminución de aportes a pensión plasmados en la Ley 210 de 2019, de modo que lo descontado por la accionada se encuentra ajustado a derecho, máxime que fue la propia Sala de Casación Laboral que autorizó este descuento.

## RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la **DEMANDANTE** propuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación, alegando que, en punto de los descuentos realizados al retroactivo por concepto de aportes a salud, toda vez que, de las cuentas adjuntadas por la entidad, se puede ver que

la deducción por salud se llevó a cabo sobre las 13 mesadas anuales, y no sobre 12, como ha debido ser, en tanto no es procedente realizar descuentos de la mesada adicional (Archivo 25 ED).

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 23 de febrero de 2023, se dispuso el traslado para alegatos a las partes, sin que dentro del término legal se hubieran pronunciado las partes.

### PROBLEMA (S) A RESOLVER

Visto lo anterior, el asunto que concierne a la Sala estriba en determinar si está ajustado a derecho el descuento en virtud de los aportes a salud realizado del retroactivo cancelado por **PENSIONES DE ANTIOQUIA** en favor de la señora **GLORIA INÉS RESTREPO RESTREPO**.

### CONSIDERACIONES

Es preciso indicar que conforme el numeral 9° del artículo 65 del CPT y SS, la decisión sobre las excepciones en el proceso ejecutivo es apelable. En consecuencia, la Sala resolverá el recurso siguiendo los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPL, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Como bien es sabido, ante la reducida regulación adjetiva laboral respecto del trámite ejecutivo, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 145 CPLSS, en procesos como el estudiado debe acudir principalmente a lo reglado en el CGP en relación con las fases a agotar en la ejecución. En esa senda, el artículo 423 *ibidem*, estipula que cuando la obligación insatisfecha sea por sumas dinerarias, en la orden ejecutiva debe ordenarse su pago en el plazo de cinco (5) días. De llegar a darse el pago dentro del espacio concedido, señala el artículo 440 CGP, solo habrá lugar a condenar en costas al ejecutado, quien a su vez tendrá la posibilidad de solicitar la exoneración de este rubro.

Así mismo, al tenor del artículo 442 CGP, dentro de los 10 días siguientes al mandamiento, el ejecutado tiene la posibilidad de presentar excepciones de mérito, que, en casos donde el título base del recaudo proviene de una sentencia, solo es dable formular “(...) **las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.** (...)”.

Justamente, a través de las excepciones de fondo se ataca el derecho reclamado en sí mismo, alegando que éste **no ha existido, o que habiendo nacido se modificó o ya se extinguió; como lo sería en este último caso el pago total o cumplimiento total de la obligación**, como lo encontró probado parcialmente la Juzgadora de primera instancia en este asunto.

En ese sentido, cumple indicar que, en el particular, la ejecución adelantada está fundamentada en la Sentencia SL916-2021 (Archivo 02 ED) que dispuso:

***“(...) SEGUNDO: Condenar a Pensiones de Antioquia a cancelarle a Gloria Inés Restrepo Restrepo la suma de \$74.136.002 por concepto de diferencias en el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 31 de agosto de 2009 hasta el 28 de febrero de 2021.***

***TERCERO: Condenar a Pensiones de Antioquia a pagarle a la accionante las mesadas pensionales que se causen desde el 1° de marzo de 2021 en adelante, en cuantía de \$3.660.844, debiendo ser reajustada anualmente con la variación porcentual del IPC, sin que en ningún momento pueda ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente para cada año.***

**CUARTO:** Condenar a Pensiones de Antioquia a que pague las diferencias adeudadas a la demandante con su debida indexación a la fecha de la cancelación efectiva.

**QUINTO:** Autorizar a la demandada para que del retroactivo a cancelar a la actora, efectúe los respectivos descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (...)”.

A efectos de cumplir con lo ordenado, **PENSIONES DE ANTIOQUIA** expidió la Resolución No. 2022030160 del 24 de febrero de 2022, acatando el reajuste pensional ordenado, por lo que procedió a disponer el pago de la suma de \$76.083.119 por concepto de diferencias pensionales adeudadas del 31 de agosto de 2009 hasta el 31 de enero de 2022, aspecto en el cual incluyó la indexación de tales diferencias, y el descuento de la suma de \$10.289.769 por aportes con destino al sistema de salud, como aparece reflejado en el siguiente cuadro (f. 14 Archivo 11 ED):

FECHA LIQUIDACION:		19-oct-21		R = RH x (IPC Final / IPC Inicial)		IPC FINAL		ene-22 113.26	
NOMBRE PENSIONADO:		GLORIA INES RESTREPO RESTREPO		R =		Valor presente			
CEDULA:		42.972.130		RH =		Valor histórico			
FECHA LIMITE DE PAGO		25-feb-22		IPC Final =		El IPC vigente a la fecha de			
INICIO LIQUIDACION SENTENCIA JUDICIAL		31-ago-19		IPC Inicial =		El vigente en cada mes			
VALOR ORDENADO POR EL JUZGADO (desde 31-08-2019 hasta el 28-02-2021)		\$ 74.136.002							
FECHA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA		N/A							
PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE INTERESES		N/A							
FECHA PRESENTACION SOLICITUD EN P de A		N/A							
PRESCRIPCION		N/A							
MESADA INICIAL (2021)		\$ 3.050.705							
MESADA INICIAL (2021) RELIQUIDADA		\$ 3.660.844							
VALOR MESADA 2022 RELIQUIDADA		\$ 3.866.583				\$ 16.110.7643			

TABLA DE RELIQUIDACION MESADA			
MES-AÑO	VIR CANCELADO	VIR RELIQUIDADO	VIR A PAGAR
febrero-21	\$ 0	\$ 0	\$ 74.136.002
marzo-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
abril-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
mayo-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
junio-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
julio-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
agosto-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
septiembre-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
octubre-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
noviembre-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
diciembre-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
enero-22	\$ 3.222.155	\$ 3.866.583	\$ 644.429
TOTALES	\$ 33.729.205	\$ 40.475.023	\$ 80.881.821

ACTUALIZACION MESADA PENS INDEXADA				
% IPC MES	MES	VIR INDEXACION	VIR MESADA + INDEXACION	VALOR SALUD
106.58	feb-21	\$ 4.646.542	\$ 78.782.544	\$ (9.453.905)
107.12	mar-21	\$ 34.972	\$ 645.111	\$ (77.413)
107.76	abr-21	\$ 31.141	\$ 641.280	\$ (78.954)
108.84	may-21	\$ 24.778	\$ 634.917	\$ (78.190)
108.78	jun-21	\$ 25.128	\$ 635.267	\$ (78.232)
109.14	jul-21	\$ 23.033	\$ 633.172	\$ (75.981)
109.62	ago-21	\$ 20.260	\$ 630.399	\$ (75.848)
110.04	sep-21	\$ 17.854	\$ 627.995	\$ (75.358)
110.06	oct-21	\$ 17.740	\$ 627.879	\$ (75.345)
110.60	nov-21	\$ 14.674	\$ 624.813	\$ (74.978)
111.41	dic-21	\$ 10.132	\$ 620.271	\$ (74.432)
113.26	ene-22	\$ 0	\$ 644.429	\$ (77.331)
		\$ 4.866.254	\$ 85.748.076	\$ 10.289.769

MESADA 13 DICIEMBRE			
MES-AÑO	VIR CANCELADO	VIR RELIQUIDADO	VIR A PAGAR
noviembre-21	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139
SUBTOTAL	\$ 3.050.705	\$ 3.660.844	\$ 610.139

ACTUALIZACION MESADA 13 DIC INDEXADA			
% IPC MES	MES	VIR MESADA	VIR MESADA + INDEXACION
110.60	nov-21	\$ 14.674	\$ 624.813
		\$ 14.074	\$ 624.813

TOTALES INDEXADOS	
TOTAL RETROACTIVO MESADAS	\$ 85.748.075
TOTAL MESADA ADIC DICIEMBRE	\$ 624.813
SUBTOTAL	\$ 86.372.888

TOTALES DEDUCCIONES	
SEGURIDAD SOCIAL POR SENTENCIA JUDICIAL	\$ 10.289.769
SUBTOTAL	\$ 10.289.769

TOTAL NETO SENTENCIA	\$ 76.083.119
----------------------	---------------

Visto lo anterior, en torno a la discusión trazada desde el recurso de apelación, esto es, lo relativo a la procedencia de los descuentos en salud sobre la mesada adicional percibida anualmente por la demandante, es menester recordar que, por disposición legal, la

población pensionada está a cargo del total de la cotización en salud, como lo dispone el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 que reza: “(...) *La cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación laboral. (...)*”, caso en el cual también está reglamentado que las entidades pagadoras de las pensiones tienen la obligación de descontar de la respectiva mesada del pensionado, la cotización en salud, para seguido transferirla a la EPS donde se encuentre afiliado. Así lo establece el inciso 3° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 que reza: “(...) *Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferido a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud. (...)*”.

En concordancia con ello, ha señalado la corte que, dicho descuento opera por ministerio de la Ley, y ni siquiera, cuando el pago de la pensión deviene del reconocimiento en sede judicial, se requiere de pronunciamiento expreso del Juez en el sentido de autorizar aquella deducción, tal como fue memorado en Sentencia SL1864-2020 en la que dijo:

*“(...) Bajo ese contexto, tal y como lo viene adocrinando esta Corporación, acorde a lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 42 inc. 3° del Decreto 692 de 1994, los descuentos por aportes en salud, operan por ministerio de la ley, sin que, para ello, sea menester declaración judicial alguna, razón por la cual, las entidades pagadoras de pensiones, se encuentran facultadas a efectos de generar tales deducciones del monto constitutivo del retroactivo, y transferirlo a la entidad a la que presente afiliación al pensionado (ver sentencias CSJ SL1359-2019, CSJ SL1794 -2019, CSJ SL2157 -2019 y CSJ SL2234 -2019) (...)”.*

Bajo el panorama legal descrito, precisa la Sala, la aspiración de la recurrente no cuenta con sustento legal, en la medida que, la normativa regulatoria de los aportes a salud en cabeza del pensionado, a decir verdad, no contempla la exclusión de la mesada adicional de las deducciones por concepto de la cotización en salud, cuestión que para la Corporación encuentra sustento, entre otros, en el principio de **solidaridad** propio del sistema de seguridad social en salud, la **naturaleza jurídica de las cotizaciones**, entendidas como aquellos emolumentos de orden parafiscal destinada a financiar el propio sistema, al igual que la **obligación legal** impuesta al continente de pensionados relativa a cotizar a pensión, punto este último considerado como acorde a la Constitución Nacional.

Al respecto, se trae a colación lo señalado en la Sentencia C-1000 de 2007:

*“(...) en relación con la aplicación del **principio de solidaridad** en materia de seguridad social, la Corte ha considerado que (i) éste permite que el derecho a la seguridad social se realice, si es necesario, a través de la exigencia de prestaciones adicionales por parte de las entidades que han cumplido con todas sus obligaciones prestacionales, conforme a lo establecido en las leyes (...) el principio aludido también impone un compromiso sustancial del Estado en cualquiera de sus niveles (Nación, departamento, municipio), así como de los empleadores públicos y privados en la protección efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus familias<sup>[23]</sup>; (ii) implica que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto<sup>[24]</sup>”; (iii) la ley puede, dentro de determinados límites, estructurar la forma cómo los distintos agentes deben cumplir con su deber de solidaridad<sup>[25]</sup>; (iv) los aportes deben ser fijados de conformidad con criterios de progresividad, que permitan que quienes más capacidad contributiva tengan, aporten en proporciones mayores<sup>[26]</sup>; (v) si*

bien es uno de aquellos considerados fundamentales por el primer artículo de la Constitución, no tiene por ello un carácter absoluto, ilimitado, ni superior frente a los demás que definen el perfil del Estado Social de Derecho, sino que la eficacia jurídica de otros valores, principios y objetivos constitucionales puede acarrear su restricción, mas no su eliminación<sup>[27]</sup>; (vi) conforme a lo prescrito por el artículo 95 superior, el principio de solidaridad genera deberes concretos en cabeza de las personas, no puede en cambio hablarse de correlativos derechos subjetivos concretamente exigibles en materia de seguridad social, emanados directamente de tal principio constitucional.

(...)

Por otra parte, en cuanto a la **naturaleza jurídica de las cotizaciones en salud**, la Corte ha sido constante en afirmar que (i) se trata de rentas parafiscales que constituyen un instrumento para la generación de ingresos públicos, representadas en forma de gravamen que se establece con carácter impositivo por la ley para afectar a un determinado y único grupo social o económico, y que debe utilizarse en beneficio del propio grupo gravado<sup>[32]</sup>; (ii) es un gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuya destinación específica es financiar ese mismo Sistema<sup>[33]</sup>, con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad<sup>[34]</sup>; (iii) se caracteriza, a su vez, “por su obligatoriedad, en cuanto se exigen como los demás tributos en ejercicio del poder coercitivo del Estado; su determinación o singularidad, ya que sólo grava a un grupo, sector o gremio económico o social; **su destinación específica, toda vez que redunde en beneficio exclusivo del grupo, sector o gremio que los tributa.**

(...)

Finalmente, en cuanto al **deber que tienen los pensionados de cotizar en materia de salud**, la Corte ha estimado que (i) es un desarrollo natural de los preceptos constitucionales que la ley ordene brindar asistencia médica a los pensionados y que prevea que éstos paguen una cotización para tal efecto, ya que la seguridad social no es gratuita sino que se financia, en parte, con los mismos aportes de los beneficiados, de conformidad con los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad; y (ii) no viola la Constitución que el legislador establezca que los pensionados deben cotizar en materia de salud (...).’’

Ahora, por si lo anterior fuere poco, resáltese que, como lo señaló la Juzgadora de primer grado, lo dispuesto en la Sentencia base del recaudo ejecutivo fue: “(...) **Autorizar a la demandada para que del retroactivo a cancelar a la actora, efectúe los respectivos descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (...)**”, situación que, palabras más palabras menos, permite colegir la procedencia del descuento de los aportes mencionados del importe total del retroactivo, sin diferenciar una mesada de otra, lo cual no da lugar a asumir una postura distinta a la falladora.

De ahí que proceda confirmar la decisión de la Juez de primer grado. Las costas de esta instancia están a cargo de la demandante, incluyendo como agencias en derecho la suma de \$100.000.

Sin que sean necesarias más consideraciones, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**


## RESUELVE


**PRIMERO: CONFIRMAR** el Auto del 2 agosto de 2022 proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo de la ejecutante, incluyendo como agencias en derecho la suma de \$100.000.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 054 del 29  
de marzo de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>